



Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

EXPTE.82072/2019

**“BURGOS, CARLOS ERNESTO c/ MIN.DE PRODUCCION Y TRABAJO-
SEC.GOB.DE TRABAJO Y EMPLEO s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar pronunciamiento se procede a emitir el voto:

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Carlos Ernesto Burgos impugna la decisión administrativa N° 25.479/2015 en cuanto le impone una multa de \$ 76.720,80 por infracción al artículo agregado sin número a continuación del 40 de la ley 11.683.

Fundamenta su reclamo en que equivocadamente las actas de inspección refieren la existencia de personas trabajando en tareas de construcción y albañilería en un domicilio particular bajo su dependencia cuando en realidad el no es el empleador, sino el director técnico de la obra dado su carácter de arquitecto. Reitera su condición de profesional autónomo y afirma que la responsabilidad de inscribir a las personas relevadas corresponde a una tercera persona y no a él.

Desde el punto de vista formal, corresponde la apertura de la presente instancia dado que el presentante si bien planteó la inconstitucionalidad de las normas legales que imponen tal exigencia, efectuó el deposito previsto por el artículo 15 de la ley 18.820 y modificatorias (ver fs. 75).

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento no advierto que asista razón al apelante.

El instrumento que obra a fs. 11 acredita la condición de arquitecto del Señor Burgos y que fue contratado por el propietario del inmueble de la calle San Juan 619 de San Miguel de Tucumán Julio Cesar Azalot para ampliar una construcción ya existente. De dicha documentación no surgen los términos del contrato de locación de obra salvo el compromiso de abonar al apelante la cantidad de \$ 11.000 -50% al inicio y 50% al finalizar la obra-. No se especifica a cargo de quienes será la contratación del personal dependiente: de apelante, del dueño de la vivienda o de un tercero contratista -Ernesto José Negro-. Tampoco se especifica en autos porque el interesado no acompañó el contrato de locación de obra que afirma haber suscripto y del cual bien podrían surgir las tareas a su cargo (art.377 CPCCN).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

El documento obrante a fs.34, supuestamente suscripto por el señor Ernesto Negro carece de idoneidad probatoria pues estamos ante un instrumento de carácter privado cuya firma no ha sido reconocida por su suscriptor ni se la autenticó mediante la intervención de un escribano publico (conf. Art.314 Cód. Civ. y Ccial de la Nación). Tampoco se ofreció en sede administrativa la declaración testimonial del mencionado señor Negro ni surge que los cuatro trabajadores relevados hubieran sido inscriptos por este último, hechos sin duda que hubieran podido arrojar luz sobre la verdad de lo acontecido.

Por otra parte, dada la situación económica y social de nuestro país una persona con el título de arquitecto bien puede desempeñarse como dependiente, actuar como profesional autónomo o insertarse en el mercado de trabajo como empleador de la construcción. A ello debe aunarse que lo actuado por los inspectores fiscales goza de la presunción de legitimidad (art. 12 de la ley 19.549) por lo que en autos no encuentro motivo para apartarme de lo decidido en la instancia administrativa.

En cuanto a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1255 del C.C. y Ccial de la Nación, la ley 27.423 y lo dispuesto por el Superior Tribunal de la Nación a través de su Acordada 12/2022 se regulan los honorarios de representación letrada de la parte demandada y los de la parte actora en 6 UMA (\$54.006) y 3 UMA (\$ 27.003) respectivamente.

Por lo expuesto propongo se declare habilitada la presente instancia judicial confirmando la resolución recurrida, las costas se impondrán al impugnante (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 6 UMA (\$54.006) y 3 UMA (\$ 27.003) respectivamente.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto de la Doctora Dorado.

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

Disiento con el voto de mis colegas preopinantes.

Carlos Ernesto Burgos, apela la resolución DRF N° 9654.del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que desestima el recurso de impugnación interpuesto contra la multa determinada por infracción cometida al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la Ley 11.683 (texto ordenado por Decreto N° 821/98 y sus modificaciones).





Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

El recurrente plantea la inconstitucionalidad de la norma que impone el depósito previo de la suma debatida (art. 15 de la ley 18820) y alega imposibilidad de oblarlo atento la magnitud de la multa impuesta y su carácter de jubilado. A fs.74 el organismo señala que no ha cumplido con el requisito del previo pago según resulta de su sistema de consulta; sin embargo, en la nota de elevación a la Cámara obrante a fs. 75 se informa que la infractora ha cumplimentado con el requisito de previo pago de la multa.

Ante dicha manifestación y priorizando el derecho de defensa, considero que debe habilitarse la instancia y analizar el recurso impetrado.

La deuda tiene su origen en el relevamiento de personal llevado a cabo en la calle San Juan N° 619, capital, Tucumán, en el cual se constata la presencia de personal que se encontraba desempeñando tareas, considerando el organismo que las mismas eran en relación de dependencia del actor.

Sostiene el apelante que el propietario del inmueble lo contrató en su calidad de arquitecto para la realización de proyecto y dirección técnica de la obra, presentando la orden de trabajo del Colegio de Arquitectos de Tucumán, para la realización de la misma. Denuncia como verdadero contratista al Sr. Ernesto José Negro. Cuestiona que las pruebas no fueran aceptadas por el organismo. Alega que en caso de duda respecto de la autenticidad de la firma del Sr. Negro, la administración debió haber citado a mismo a reconocer firma. Ratifica que la obra se contrató por Administración, estando a cargo del profesional la dirección técnica de la obra, siendo responsabilidad del propietario las demás consecuencias legales de la figura invocada.

El organismo ratifica la fuerza probatoria de las actas y su carácter de instrumento público, dando prevalencia a la presunción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Se fija una multa de \$ 76.720,80. Sanción que es impugnada por el actor, lo que fue desestimado mediante la resolución recurrida en autos.

Conforme surge de la Orden de Trabajo N° 046287 acompañada oportunamente por el actor, se le encomienda, relevamiento proyecto y dirección técnica, fijándose los honorarios por tal tarea. En su descargo además de dicha documentación, denuncia al Sr. Ernesto José Negro, quien cumple el rol de contratista de obra y, sostiene, es el responsable de la contratación del personal para la realización de la misma.

Obra en los actuados la nota dirigida el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, suscripta por el Sr. Negro, en la cual este





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

manifiesta que se desempeñó como contratista en la obra que llevada a cabo en San Juan N° 619, donde se efectuó el relevamiento, siendo el único responsable de la situación de los trabajadores mencionados en el acta. Refiere que el arquitecto Carlos E. Burgos ejercía la función de Proyectista y Director Técnico, función ineludible exigida por la Dirección de Catastro y Edificación Privada de la Municipalidad local, y que no tiene participación con la contratación de la Mano de Obra solicita que dirijan el reclamo a su persona, para poder demostrar la verdadera situación de los trabajadores implicados en el acta. Adjunta constancia de inscripción en AFIP autónomo y empleador.

Esta documentación, no fue considerada relevante por el organismo, el cual prioriza, como se ha dicho, la declaración de los sujetos relevados y la falta de firma certificada notarialmente de este documento privado. Destaca que los trabajadores relevados no se encontraban registrados.

Es indudable que el arquitecto si se desempeñaba como director de la obra, al no ser una empresa unipersonal de la industria de la construcción, sino un profesional que se desempeñaba en ese ámbito, no corresponde encuadrarlo como empleador. Ello salvo que se demuestre que, en concurrencia con dicha actividad, actuaba como un verdadero empresario y como tal se erigiría como empleador,

Por tanto, solo podrá ser considerado empleador si esta situación se encuentra probada, es decir, si su actividad fue mas alla del proyecto o dirección de la obra, suministrando asimismo el personal para la realización de la obra, con desempeño a su cargo.

En el caso de autos, se acredita la contratación del actor como proyectista y director de Obra. Existe una nota suscripta por el Sr. Negro que expresamente manifiesta su condición de contratista de la obra y empleador de los sujetos relevados. Nota que, ante la duda sobre su autenticidad, no ameritó de parte del organismo un emplazamiento a reconocer firmas o lo que es más trascendente aun la investigación de la situación de los sujetos relevados a su respecto y, en su caso, determinar su responsabilidad por la relación laboral que el mismo asume.

La prueba exigible debe ser suficientemente asertiva y convincente en cuanto a la existencia de la relación laboral invocada. No se está en presencia de un litigio entre dependiente y empleador, con amplitud de prueba, por lo que la presunción del artículo 23 de la L.C.T. debe ser considerada con prudencia. Máxime cuando existe una manifestación de quien asume la calidad de empleador. Ante ello, se impone al organismo actuante acreditar fehacientemente las relaciones contractuales dependientes para





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

determinar la sanción, debiendo evaluar las circunstancias que se alegan y que hacen a la peculiaridad de la prestación, sobre todo teniendo en cuenta las amplias facultades de fiscalización con que cuenta, y la necesidad de arribar a la verdad jurídica objetiva

Considero, en conclusión, que el organismo no ha demostrado fehacientemente el vínculo dependiente de los sujetos relevados con el actor, por lo que es mi voto, revocar la resolución recurrida. Con costas (conforme art. 68CPCCN y criterio del Alto Tribunal en los autos "Cooperativa Eléctrica Azul Ltda. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - D.G.I." con fecha 5 de octubre de 2004, oportunidad en que el Tribunal modificó la doctrina de Fallos: 323:1557).

Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 3 UMA equivalente a \$ 27.003(conf. Acordada 12/2022 Doctrina art. 1255CCyCN y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018), importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” sent. Del 16.06.03, Fallos 316,1533)

Por lo señalado, es mi voto: Revocar la resolución impugnada. Ordenar, en su caso, la devolución del importe depositado para habilitar la instancia en el plazo de veinte días. Imponer las costas al organismo (art. 68 CPCCN). Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora 3 UMA, equivalente a \$ 27.003 (conf. Acordada 12/2022). Importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder

En virtud de lo expresado **el TRIBUNAL, por mayoría, RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Confirmar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas al impugnante (art. 68 CPCCN), 4º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte demandada y de la parte actora en 6 UMA (\$54.006) y 3 UMA (\$ 27.003) respectivamente

WALTER F. CARNOTA
Juez de Cámara Subrogante

NORA CARMEN DORADO
Juez de Cámara

JUAN FANTINI ALBARENQUE
Juez de Cámara

Fecha de firma: 16/06/2022

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE



#34018271#321432106#20220616130951489



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

Ante mí: **AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI**
Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

